

MERCANTILISMO Y SOCIEDAD ESTAMENTAL EN LA RECOPIACION DE INDIAS

Luis Navarro García
Universidad de Sevilla

Existe una considerable desorientación sobre temas tan importantes como el de la política económica y el de la estructura social de las Indias. En buena medida, ello se debe a la confusión producida en torno a los conceptos de “mercantilismo”, “feudalismo”, “estamentalidad”, o “clasismo”, a lo que en el caso indiano se añade la complejidad de una situación en la que conviven y se entremezclan diversas razas, y en la que ocupa una posición significativa el esclavismo. Con ánimo de arrojar alguna luz sobre estos puntos concebimos el propósito de sistematizar las ideas económicas y sociales que impregnan la Recopilación de Leyes de Indias.

La Recopilación no es la mejor fuente, ni mucho menos la única, para estudiar la “realidad” indiana. Es discutible el grado de aplicación de sus normas; no se recoge en ellas la extraordinaria diversidad regional, a pesar de su casuismo; pero sobre todo, la Recopilación no ha sido concebida con el propósito primordial de formular una política económica o un ordenamiento social, de modo que sólo en algunos casos e incidentalmente se alude a las cuestiones que sobre estas materias nos planteamos.

Pero la Recopilación es al mismo tiempo una fuente interesante y valiosa porque nos proporciona, aunque incompleto, el retrato de la sociedad ultramarina para una fecha concreta, y porque refleja, sin duda, no sólo las ideas que inspiraron desde 1492 el gobierno de las Indias, sino las que en 1680 e inmediatamente antes compartían los recopiladores y, en conjunto, el Consejo de Indias.

Pensando en aprovechar estas posibilidades hemos realizado una detenida lectura de los nueve libros de la Recopilación, anotando todas las disposiciones, y con frecuencia las simples alusiones, y aun omisiones, que nos parecían expresivas de la mentalidad económica y social que preside la vida de las Indias, y nos hemos esforzado por introducir un orden entre esas dispersas informaciones. Deliberadamente nos hemos enfrentado a la resistencia que siempre ofrece un texto legal al ser utilizado como fuente histórica, y hemos renunciado a todo apoyo bibliográfico, de suerte que aparezcan con absoluta nitidez los datos que suministra la Recopilación.

LAS IDEAS MERCANTILISTAS EN LA RECOPILACION

Renunciando a hacer una exposición, sin duda innecesaria en este caso, del conjunto de doctrinas convencionalmente denominadas mercantilistas, nos limitaremos a indagar la presencia en la Recopilación de las que pueden ser consideradas ideas clave y **características del mercantilismo, a saber, el estatismo, el poblacionismo, el metalismo, el proteccionismo y el colonialismo monopolista.** Tampoco insistiremos en la tesis de que la política española -como la de las otras potencias europeas- sólo en parte se **atuvo a lo que pudiéramos llamar los principios ortodoxos del mercantilismo,** con la particularidad de que en algunos casos España, como veremos, se desvió de esos principios por imperativos éticos.

Veamos el reflejo de aquellas cinco ideas en la Recopilación.

Estatismo

Designamos con este término la actitud por la cual el Príncipe se reserva determinadas fuentes de riqueza o adopta otras medidas tendentes a asegurar recursos económicos y de materiales de interés estratégico con vistas al fortalecimiento del Estado, limitando con ello la libertad de acción de los vasallos, a los que por otra parte estimula en empresas acordes con el interés del Príncipe.

La Recopilación recoge a este respecto la existencia de los estancos de azogue, sal, pimienta, naipes, solimán, además del

arbitrio del papel sellado, que eran otras tantas rentas de la Corona, de diverso valor (leyes 1 y 13-16, título 23, libro 8). Es curioso que en **cambio se niegue que pueda haber estanco de la cochinilla (17, 23, 8).**

Por otra parte, el rey prohíbe que nadie corte maderas de caoba, cedro y roble en La Habana y los parajes vecinos de Chorreras y costas de Barlovento y Sotavento (3 y 13, 17, 4), con ánimo de asegurar así la provisión de estas maderas para la construcción naval. Decididamente impulsa la construcción naval en el Mar del Sur y ordena a los virreyes la fundición de artillería y balería para que aquellas costas estén en estado de defensa (1 y 5, 44, 9), establece la propiedad de todas las minas de alcrebite o azufre, útiles para la fabricación de pólvora (5, 11, 8), y prohíbe que vayan barcos de Manila a China simplemente porque se entiende que esas embarcaciones pueden hacer falta para la defensa de las Filipinas (38, 45, 9), mientras que se ofrecen socorros pecuniarios a los fabricantes de naves (2, 28, 9).

Pero la expresión más clara de esa concepción de la superioridad del interés del Estado sobre los derechos de los ciudadanos está en la conocida prohibición -entre otras- de la navegación y comercio entre Perú y México “por todos los caminos” (78, 45, 9), motivada por el propósito de retener en América y hacer venir a la metrópoli los metales preciosos, evitando su fuga hacia Asia.

Por lo demás, todas las restantes líneas de la política económica indiana buscan el fortalecimiento del Estado y la defensa de sus supremos intereses.

Poblacionismo

Puede considerarse política poblacionista, orientada al aumento del número de habitantes de las colonias, la autorización para que se permita ir a empresas de descubrimiento incluso a los delincuentes (6, 3, 4), por cuanto ésta es una medida para el fomento de la población de nuevos territorios incorporados a la Corona. Del mismo modo, las restricciones para la salida de la gente de Filipinas, particularmente los que son ricos y principales (63, 26, 9), como la prohibición general para que nadie salga de su provincia sin

licencia de la autoridad (17, 1, 5), que son disposiciones tendentes a asegurar la conservación de aquellos países.

Están estrechamente vinculadas a los propósitos economicistas del poblacionismo las leyes contra el ocio, tales como la que propone que todos los ociosos pasen a trabajar a las minas (13, 19, 4), y la que dispone la expulsión de todas las personas ociosas, vagabundas y pobres (64, 26, 9).

Pero desde luego en ningún lugar aparece el afán que inspira a otros gobiernos europeos para poblar sus colonias y les lleva a fomentar la emigración a América, incluso enviando a sus súbditos allá contra su voluntad. Por el contrario, la Recopilación establece medidas restrictivas a la emigración. Para empezar, la de que nadie pase a las Indias sin licencia (1, 26, 9), ni siquiera los españoles nacidos allí -aunque deben volver siempre allí los mestizos (14 y 23, 26, 9). Por otra parte, sólo el rey puede autorizar el paso a Indias de mujeres solteras (24, 26, 9). En ningún caso pueden pasar los conversos, descendientes de quemados y demás personas de dudosa ortodoxia católica, así como por supuesto los berberiscos, hijos de judíos (15 y 16, 26, 9), e incluso los gitanos, que si habían pasado a Indias debían ser obligados a regresar a España (20, 26, 9).

Del mismo modo, no podían pasar esclavos a Indias sin licencia, y aun entonces sólo esclavos africanos y no “gelofes” (17-19, 26, 9), pero determinándose al mismo tiempo que los esclavos fuesen llevados con sus mujeres e hijos (22, 26, 9).

Otra limitación a una posible política poblacionista viene impuesta por el deseo de retener en la metrópoli a individuos dotados de aptitudes especialmente útiles al Estado: tal es el caso de los marineros de los navíos dados al través en Indias, a los que se obliga a volver a España (20, 25, 9) lo que podía ser reforzado además por el hecho de que no habían viajado a América con licencia de pasajero.

Por último, y en sentido contrario, las limitaciones impuestas a la inmigración se suavizan cuando se trata de incorporar individuos valiosos por sus conocimientos. Ya se advierte, con referencia sin duda a los puertos peninsulares, que se admita a los extranjeros en las cofradías de calafates y carpinteros (17, 28, 9), pero más abiertamente y en relación con las Indias se dispone que se admita a

los extranjeros que posean oficios mecánicos útiles y sean católicos (9, 27, 9), así como a los marineros extranjeros existentes en Filipinas (37, 45, 9). Finalmente se acuerda disimular el caso de aquellos extranjeros que lleven mucho tiempo residiendo en las provincias indianas, e incluso dar facilidades a los vasallos no españoles de la Corona (12, 27, 9).

Metalismo

Generalmente es considerado el metalismo como el rasgo más sobresaliente y peculiar del mercantilismo. Es la preocupación del Estado por obtener y atesorar metales preciosos, sea por considerar que en ellos reside la principal riqueza, o por estimarlos como base inexcusable del poder y la gloria del Estado, cuando no por ambas razones.

La Recopilación participa plenamente de esta mentalidad cuando en la ley 1ª, título 11, del libro 8º, al encargar a los virreyes, presidentes y gobernadores que procuren el beneficio de las minas y el descubrimiento de otras nuevas, lo justifica explicando “que la riqueza y abundancia de plata y oro es el nervio principal de que resulta la de aquellos y estos reinos”.

También se hace constar la preferencia por el oro, disponiéndose que el que se recaude de quintos y otra procedencia se remita en especie y no se reduzca a plata (20, 10, 8); o como se dice en otro lugar, sin trocarlo, ni convertirlo en otro género, moneda o pasta (16, 26, 8).

La preocupación metalista explica las diversas medidas de **fomento de la minería, como la ya aludida (1ª, 11, 8), y la que encarga** a las autoridades que tengan en esto muy particular cuidado, cumpliendo las órdenes sobre servicios personales de indios, “porque el descubrimiento, beneficio y labor de las minas es tan conveniente a la prosperidad y aumento de estos reinos y los de las Indias” (9, 19, 4). Por lo mismo se dispone que cualquier persona, de cualquier estado o dignidad, puede dedicarse a la minería (1ª, 19, 4), y que todos los ociosos sean inducidos a trabajar en minas (13. 19, 4) **y se llega a prever la firma de capitulaciones para descubrimiento de tesoros, sepulturas y adoratorios de los indios (1ª, 12, 8).**

Preocupación no menor, como es notorio, muestra la Corona por retener esos metales preciosos. Se autoriza la circulación libre de la moneda en Indias, pero sólo se permite su exportación a España (15, 24, 4); se prohíbe que se pueda vender oro, plata, o piedras preciosas en una ocasional arribada a las Azores (47, 33, 9), lo mismo que se impide que pasen de España a Indias oro y plata labrados (34, 35, 9), como de México a Filipinas (11, 45, 9). Se autoriza la manifestación de plata en Veracruz para evitar que pase a otros reinos (15, 10, 8). Se prohíbe el comercio con China y se limita el de Filipinas con objeto de reducir al mínimo la salida de plata hacia Oriente, y aún se dispone que el comercio de Manila se haga por trueque de mercancías con el mismo objeto (1ª y 35, 45, 9); análogo fin tienen la prohibición de la relación mercantil entre Perú y México (78, 45, 9) y el cierre del puerto de Buenos Aires, acompañado del establecimiento de la aduana de Córdoba (1ª, 14, 8).

La Corona pone comprensible interés en la reglamentación de la moneda, disponiendo se labre sólo de plata (3, 23, 4), y estableciendo su equivalencia en cacao (12, 14, 4) y con las monedas en especie de Paraguay, Río de la Plata y Tucumán (7, 24, 4), así como con la moneda de vellón autorizada en Santo Domingo (8, 24, 4). Caso especial es el de Margarita y Río Hacha, donde se permite hacer los pagos en perlas (7, 18, 4).

Por último, no falta la atención puesta en otros metales útiles y piedras preciosas. Así se pide se busquen minas de azogue (4, 19, 4) y se envíe cobre de Cuba (11, 19, 4; y 4, 11, 8); que se busquen nuevos ostrales de perlas (15, 25, 4), detallándose las variantes del aljófar y del ámbar (37, 39, 40; y 50, 10, 8), y aún de las piezas de valor que se pueden obtener en Florida de los restos de naufragios (8, 12, 8), y se encarga la búsqueda de minas de plomo, estaño, cobre, hierro y otros metales (51, 10, 8), útiles en especial para la industria bélica.

Proteccionismo

Como es usual, la política proteccionista opera en dos vertientes: excluyendo del mercado nacional mercancías competidoras extranjeras, y supeditando a las colonias a los intereses económicos de la metrópoli.

Así, de un lado se prohíbe que nadie traiga a España palo brasil que no sea de las Indias Occidentales (3, 18, 4), como se prohíbe que se lleve a las Indias hierro de Lieja (35, 35, 9).

Del otro, se protege el comercio nacional disponiendo que no se pongan tasas en Indias a los mercaderes españoles, sino a los regatones de allá (6, 18, 4), y se protege la exportación de vinos andaluces al mercado mexicano y centroamericano prohibiendo se lleve vino del Perú a Panamá y Guatemala (15 y 18, 18, 4); se concede perdón a quienes, contraviniendo lo dispuesto, han plantado viñas, sujetándolos al pago del 2% anual de sus frutos (18, 17, 4). Pero sobre todo, se busca cerrar en Nueva España los obrajes de paños, que se exportaban al Perú, “enflaqueciendo el trato y comercio con estos reinos, donde en su fábrica y labor se pone la atención que conviene... y por conveniencias del comercio de estos reinos no se debe permitir su aumento, ni continuarlo con el Perú” (4, 26, 4).

Se busca aprovechar materias primas indianas para la industria metropolitana: así se pide se envíe la lana de Nueva España y Nueva Granada “que aquí tiene mucho valor y será trato de grande interés” (2, 18, 4); que se traiga el tabaco cubano a Sevilla (4, 18, 4), y que los cueros indianos sean curtidos en Sevilla o en otros lugares de España (23, 18, 4). Se autoriza a traer genjibre de Nueva España (19, 42, 9), y se impulsa el cultivo de nopales de grana (17, 17, 4), así como los telares de seda en Puebla de los Angeles (5, 26, 4), y la producción de lino y cáñamo (20, 8, 4).

Colonialismo monopolista

Toda la política colonial mercantilista queda sin sentido si no va acompañada de la firme determinación de la metrópoli de reservarse en exclusiva el aprovechamiento y explotación de los mercados y recursos de sus colonias, limitando con ello las libertades de relación y negociación de los colonos, que quedan así constituidos en situación de inferioridad respecto de los habitantes de la metrópoli. La Corona española siguió siempre exactamente esta política, independientemente de que no diese a sus territorios de ultramar el nombre de “colonias”, palabra que alguna vez aparece en la Recopilación (11, 5, 4 y 18, 7, 4), pero con un sentido distinto del mercantilista. También es cierto que no se justifica la posesión de

las colonias indianas por razones económicas, sino por principios jurídicos que legitiman la dominación española (1, 1, 3). Y la subordinación de los intereses económicos a objetivos considerados de rango superior aparece meridianamente cuando se encarga a los virreyes de Nueva España “que esfuercen y favorezcan la conversión y pacificación del Nuevo México, de forma que por falta de obreros evangélicos y los demás requisitos no deje de extenderse la predicación por aquellas provincias lo posible, y que para conservar en policía cristiana a los que se fueren convirtiendo usen de los medios que mejor les pareciere, con la menos costa de nuestra real hacienda “que ser pueda” (66, 2, 3).

Pero la existencia del monopolio del tráfico con las Indias se hace visible en la prohibición de que los extranjeros participen en ese comercio (1, 27, 9), e incluso en los descubrimientos (3, 1, 4), o en la de que los portugueses puedan introducir personas o mercancías por el Río de la Plata (5, 18, 4). Por regla general, queda establecido que en ningún puerto ni parte alguna de las Indias se admita ningún género de trato con extranjeros, pena de la vida y perdimiento de bienes para los transgresores, y destitución de las autoridades que lo hubieran permitido (7, 27, 9).

Mientras que la inferioridad política de las Indias, o su absoluta subordinación a la Corona, parece reflejarse en la negativa del derecho de las ciudades indianas a hacer juntas, puesto que aunque se concede a las ciudades de México y Cuzco el primer voto respectivamente entre las de Nueva España y Perú, se puntualiza en **el primer caso que ésto se verificaría “en los congresos que se hicieren por nuestro mandado, porque sin él no es nuestra intención ni voluntad que se puedan juntar las ciudades y villas de la Indias”** (2 y 8, 2, 4).

LA ORGANIZACION SOCIAL ESTAMENTAL

Es rasgo característico de la estructura del Antiguo Régimen la aceptación de la desigualdad social de los ciudadanos como hecho natural. La Recopilación testimonia esta actitud cuando de manera

circunstancial alude a esa diversidad de rangos sociales, cuando dice que nadie, “de cualquier estado o dignidad que sea”, se siente en el tribunal con los oidores (30, 15, 3), o cuando con mayor pormenor establece que cualquier persona “de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad”, puede dedicarse a la minería por sí, o por sus criados o esclavos (1ª, 19, 4).

En una cierta medida, por supuesto, lo que la Recopilación pretende es establecer las normas permanentes de actuación de esos grupos diversos y jerárquicamente escalonados, es decir, precisar sus respectivos privilegios estamentales, aunque desde luego no es ésta su preocupación dominante, y por eso mismo no es ésta la sistemática de los nueve libros. Por el contrario, los privilegios estamentales sólo afloran, y de manera no muy clara, al cabo de una detenida exploración de esos nueve libros, de la que se desprende el reconocimiento de la existencia de los tres órdenes clásicos - eclesiástico, nobiliario y “tercer estado”- y de al menos cuatro grupos raciales -blancos o españoles, indios, mestizos y negros-, quedando en gran manera sin determinar el encaje de esta doble clasificación- lo que puede ser una de las principales conclusiones de la investigación emprendida.

Cuestion previa: la nacionalidad

El propósito mercantilista que inspira la política colonial española exige que de los beneficios que se esperan de la empresa imperial queden excluidos los extranjeros, lo que obliga a definir quiénes son los miembros de la nación española. Esa definición es clara: son españoles los naturales de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, y los de las islas de Mallorca y Menorca. La formulación de la Recopilación es en realidad la inversa, cuando dice que “declaramos por extranjeros los que no fuesen naturales de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, y los de las islas de Mallorca y Menorca”; y añade, “y así mismo declaramos por extranjeros a los portugueses” (28, 27, 9). Ha sido la empresa americana, sin duda, el factor determinante para la cristalización de la nación española.

La Recopilación remacha los límites de la nacionalidad cuando prescribe que los clérigos de Navarra sean considerados como

naturales de Castilla (32, 6, 1), y cuando establece que no pueden pertenecer a los Consulados los extranjeros, pero no lo son los de Aragón y Navarra (5, 46, 9). Del mismo modo se ordena que no se admitan artilleros o maestros de naos que no sean de Castilla, Aragón y Navarra (23, 22, 9; y 15, 24, 9).

Los *extranjeros* son excluidos de las empresas de descubrimiento (3, 1, 4); no se les permite la entrada en los castillos, ni siquiera como prisioneros (10, 8, 3), y no pueden ser nunca beneficiarios de encomiendas (14, 8, 4). Sobre todo, les está prohibido participar en el comercio y rescatar oro, plata, ni cochinilla, y aun en el caso de que se les permitiera comerciar en Indias, nunca podrían pasar de los puertos (4 y 6, 27, 9). La expresión más dura es la de que se podría condenar a diez años de galeras al extranjero que pretendiera ir a Indias a bordo de su navío después de haberlo vendido (22, 41, 9). Fuera de esto, en un lugar donde los extranjeros han de ser forzosamente admitidos, como es Filipinas, se encarga que extranjeros y sangleyes sean constantemente vigilados (4, 45, 9).

Junto a esto, aparecen sin embargo una serie de disposiciones que suavizan esta aparente hostilidad. Se admite al cabo que un extranjero pueda gozar de encomienda de indios si accede a ella por matrimonio, o le es concedida por los grandes servicios prestados (22, 27, 9). Se admite la permanencia en Indias de extranjeros que ejerzan oficios mecánicos útiles y sean católicos (9, 27,9), como se admiten marineros extranjeros en Filipinas (37, 45, 9), y hasta se dispone se disimule los casos de los extranjeros que lleven mucho tiempo residiendo en Indias, y se dé facilidad para su naturalización a los que sean vasallos de la Corona (12, 27, 9).

Hay, por último, un caso de exclusión de la comunidad indiana por razones que no son estrictamente de nacionalidad. Es el caso de los gitanos, berberiscos, e hijos de judíos, de los que se dice que deben ser enviados a España o expulsados de Indias, por temerse su perniciosa influencia sobre los indios (5, 4, 7; y 29, 5,7).

Expulsión o integración de elementos antisociales

Son razones de ética las que imponen la exclusión de estos tipos sociales -gitanos, berberiscos, e hijos de judíos-. Los gitanos son directamente equiparados a los *vagabundos* “que usan de su traje,

lengua, tratos y desconcertada vida entre los indios, artes y malos tratos, hurtos e invenciones”, y por eso se ordena sean enviados a España (5, 4, 7). En otro lugar se dice que hay que “limpiar la república... de personas ociosas... que son embarazo al buen gobierno” (64, 26, 9).

Repetidamente se previene contra los vagabundos: españoles, mestizos, o indios, que viven en pueblos de indios y causan daños a éstos. Deben ser separados los indios de los otros, y agrupados en pueblos, con tutores que les enseñen, mientras que los demás deben ponerse a servir, so pena de ser expulsados de la tierra (1ª, 4, 7).

El orden eclesiástico

La Recopilación testimonia la consideración especial que merece el clero, al que en conjunto denomina “Estado eclesiástico”. Al clero se dedica el libro I de la Recopilación, y en él se le encomienda la evangelización de indios y negros (12 y 13, 1, 1), y la exclusión de sus antiguos falsos sacerdotes y “dogmatizadores” (8, 1, 1). Se le dan normas para el buen tratamiento de los indios -que no les pongan prisiones, que no les corten el cabello- pero se le permite contar con la **aportación de indios y españoles y de la Corona para la construcción de los templos y casas de los eclesiásticos** (2 y 19, 2, 1).

Hay una manifiesta prevención contra el crecimiento excesivo de este “estado”. Por eso se dispone que no se ordenen tantos clérigos, sobre todo mestizos ilegítimos -con lo que se añade la preocupación por la procedencia social de los miembros del clero (4, 7, 1).

A los obispos, estamento superior de este orden, se les autoriza a hacer matanzas de ganados y enviar frutos a Europa (46, 7, 1). En cambio, a los religiosos se les prohíbe tener pulperías, o intentar monopolizar los abastos de ganados -“atravesar las reses” (82, 14, 1)-, **como a los clérigos se les prohíbe tratar, ni contratar, ni tener** canoas de perlas, ni minas (2-4, 11, 1), y además se les impide ser alcaldes, escribanos o abogados -aunque se les permite actuar en defensa propia, o de sus parientes, o de gentes pobres y miserables (1ª, 12, 1). Para la concesión de dignidades y prebendas, se establece que entre los clérigos deben ser preferidos aquellos que

se hayan ocupado de las catedrales, extirpación de idolatrías, misiones o conversiones, y los graduados por Universidad (4, 6, 1). Y de todo el “estado eclesiástico” se dice que en caso en que fuese necesario que tomase las armas, lo haga con traje modesto (56, 7, 1). **Privileio eclesiástico es estar exentos del pago de alcabalas las iglesias y monasterios, los prelados y los clérigos (17, 13, 8), pero no de las sisas, derramas y repartimientos (12-14, 12, 1).**

Los inquisidores, incluidos en el orden eclesiástico, también tienen prohibido el tratar, o el arrendar rentas; en cambio, son autorizados a hacerse acompañar por esclavos negros armados (29, 19, 1), están excusados de acudir a los alardes, tienen preferencia en los abastos de carnes, y sus familiares pueden ocupar cargos concejiles (29, 18, 1).

Se reconoce a la iglesia el derecho de asilo, pero se niega puedan conceder asilo a los pilotos, marineros y soldados que deben volver a España (3, 5, 1).

Vinculadas al orden eclesiástico presenta la Recopilación a las Universidades, a las que se otorgan los mismos privilegios que goza la de Salamanca en cuanto a jurisdicción y exención de pechos (1, 22, 1). Además se impide que los funcionarios de la audiencia puedan ocupar el cargo de rector (7, 22, 1) y se impone a los doctores y catedráticos la obligación de defender el dogma de la Inmaculada Concepción (15, 22, 1). Se enaltece el cargo de rector en México y Lima permitiéndole llevar dos lacayos negros con espadas (8, 22, 1).

El orden nobiliario

Tres estamentos nobiliarios aparecen, al menos, aunque de forma poco precisa, en la Recopilación: son los títulos de Castilla, los caballeros y los caciques.

De los títulos de Castilla sólo se dice que deben ser tratados por las audiencias con las honras acostumbradas (63, 15, 3).

Con alguna mayor profusión se trata de los caballeros, dándoles o no éste u otro nombre, y sin que se precise si estas denominaciones implican diferente rango social. Así se mencionan los “caballeros hijosdalgo”, “caballeros de ordenes militares”, “hijosdalgos”, además de los todavía más ambíguos casos de “encomenderos” y “escuderos”.

De los *caballeros de ordenes militares* se dice que paguen diezmos (17, 16, 1) y que las audiencias procedan contra ellos en causas criminales (96, 15, 2).

Los *hijosdalgos* son tenidos en cuenta cuando se encarga a las audiencias que guarden las ejecutorias de hidalguía y privilegios de exención (119, 15, 2), y cuando se ordena que los castellanos y alcaides de fortalezas hagan pleito homenaje ante un caballero hijodalgo (3, 8, 3). Pero la disposición más importante es aquella en virtud de la cual se declara que los primeros pobladores y sus descendientes son reconocidos como hijosdalgos de solar conocido y personas nobles de linaje, iguales a los hijosdalgos y caballeros de Castilla (6, 6, 4). Estos primeros pobladores pueden portar armas ofensivas y defensivas, aunque solo para su defensa, y dando fianzas (3, 6, 4), y han de ser preferidos para los premios y encomiendas, aunque no sean casados (4 y 5, 6, 4). En relación con ésta puede considerarse la ley que previene que para el puesto de alcalde ordinario de una ciudad se prefiera a los descendientes de conquistadores y primeros pobladores (5, 3, 5). Otras normas se refieren más bien a los hidalgos peninsulares, que pueden estar dedicados al comercio indiano. Así la que establece que los vizcaínos pueden ir de maestros en sus naos dando fianzas y renunciando a sus hidalguías (19, 24, 9), lo mismo que la que dispone que los hidalgos no gozan de exención en causa de avería (16, 9, 9). La aislada y casi anacrónica alusión a los "escuderos" en el libro IV los equipara realmente a los caballeros, al contraponerlos a los peones en el reparto de tierras (1.^a, 12, 4). Por último, concierne a los **estamentos nobiliarios la ley que previene que no se condene a gentiles hombres en galeras por ser de poco servicio** (14, 8, 7).

Los *encomenderos*, aunque nunca se exprese así, deben ser contados entre los caballeros desde el momento en que se determina que tienen la obligación de defender la tierra (44, 8, 6) y que no se les puede ejecutar deuda en sus armas y caballos teniendo otros bienes (6 y 7, 14, 5), lo mismo que en Castilla. Su condición de caballeros y guerreros queda así claramente determinada, con la obligación de tener y sustentar caballos, que aquí parece extendida a los descubridores y pobladores en general. Por otra parte, la Recopilación expresa ser conveniente que los indios se repartan en encomienda, e incluso que haya encomiendas grandes para personas de mayor mérito (23, 8, 6). Incluso por razón de esos grandes servicios -o de matrimonio- se admite la posibilidad

de que haya encomenderos extranjeros (22, 27, 9), lo que previamente se había negado (14, 8, 6).

En razón de su obligación de atender a la defensa del país, se legisla que no se les dé licencia para viajar a España si no es con gran causa (27, 9, 6). A los de Cartagena se les exige que vivan en la ciudad (31, 9, 6), y no se permite a ninguno que tenga oficios concejiles o sea capitán si no es en sus lugares (29, 9, 6). Tienen como obligaciones adicionales el contribuir a la construcción de las iglesias y el proveer a los gastos del culto en ornamentos, vino, cera, etc. (2 y 23, 2, 1). Han de pagar diezmos de los tributos que cobran a los indios (12, 16, 1) y los quintos del oro, plata, perlas y piedras preciosas que puedan constituir esos tributos (7, 10, 8), más el impuesto de alcabalas de lo que vendan de esos tributos (3, 13, 8). **De ellos se espera que adoctrinen, amparen y defiendan a sus indios** (1, 9, 6), y que se preocupen de plantar sauces y otros árboles para que no les falte leña (16, 17, 4), y al mismo tiempo se ordena que los encomenderos, y sobre todos las encomenderas, no se interfieran en los arreglos matrimoniales de los indios (21, 9, 6). Aparte de las dificultades ya aludidas que los encomenderos han de encontrar para poder salir de su lugar de obligada residencia, otras limitaciones les afectan: no pueden ser escribanos (34, 9, 6), no pueden ser corregidores de indios en su distrito (17, 2, 3), y sus parientes clérigos quedan excluidos de las doctrinas de los indios (33, 6, 1).

En cuanto a los *caciques* indios, el rey en la Recopilación los reconoce como tales, a condición de que no sean mestizos, ni se titulen señores de pueblos (1.^a, 5 y 6, 7, 6). En cambio, les autoriza a ejercer jurisdicción criminal, aunque sin llegar a disponer sentencia de muerte o pena atroz (13, 7, 6). Tampoco a los caciques les está permitido pasar a España sin licencia (17, 7, 6), mientras en otro lugar se determina que los indios pueden poseer y explotar minas sin intervención de sus caciques (14, 19, 4).

El tercer estado

A) Los blancos

Solo en una ocasión refleja la Recopilación la distinción entre peninsulares y criollos, y es cuando establece la alternancia entre estos dos grupos para acceder al cargo de provincial de las Ordenes religiosas (52, 14, 1). Alusión implícita a esta diferencia se encuentra, por supuesto, en todos los privilegios o preferencias conferidos a los

descendientes de los descubridores, conquistadores y primeros pobladores de los reinos indianos.

La distinción social más importante parece ser, en cambio, la establecida entre *funcionarios* y *vecinos*, dado que estas dos condiciones son incompatibles en la mayoría de los casos, y al funcionario, por ser el representante de la autoridad real, hay que suponerle una superior estimación, y por eso mismo un cierto cuidado en su selección.

a: Funcionarios

Los *funcionarios* son, por razones obvias, un grupo social extensamente reglamentado en la Recopilación. Claramente se advierte que respecto de los de mayor rango, como virreyes, oidores, alcaldes del crimen, o fiscales, si bien se dan normas acerca de cómo deben actuar, nada se dice acerca de su calidad social de origen -fuera ocioso; en cambio sí se alude, para establecer limitaciones, a los requisitos que deben cumplir los funcionarios inferiores, más comúnmente reclutados en Indias.

Así se dice de los virreyes que no se den cargos a sus familiares, como ni a los de las demás autoridades, como no sea por méritos (28, 2, 3); de los oidores, alcaldes y fiscales, que no tengan casas, ni tierras, ni siembras, en el distrito en que ejerzan, ni para sí, ni para vender, ni den dinero a censo, ni tengan tratos, ni participen en armadas, ni pesquerías de perlas, ni minas (55-59, 16, 2), ni contraigan matrimonio en la provincia (82 y 85, 16, 2). Tampoco ellos, ni sus mujeres e hijos podrían tratar ni contratar, ni ser regidores (49 y 52, 1, 8). Tampoco pueden poseer más de cuatro esclavos y deben vestir siempre garnacha o ropa talar, y montar caballos con gualdrapas, que sólo ellos pueden llevar (65 y 97, 16, 2), y no pueden ser rectores de las Universidades (7, 1, 1). También a los tenientes de capitán general, y al corregidor de Potosí, les afecta la prohibición de casar en su distrito (nota al título 16, libro 2), mientras que los familiares de un oidor no pueden ejercer como abogados (28, 24, 2). Nadie se puede sentar en tribunal junto a los oidores (30, 15, 3), ni las esposas de las autoridades en general pueden instalarse en estrados de madera en los actos públicos, pero sí en bancos (33, 15, 3). Los criados de las autoridades no pueden ser admitidos en plaza militar (11, 10, 3).

Tratándose de los cargos de segundo rango, ya aflora la preocupación por la condición social de sus titulares. Como norma

general se establece que recaigan en personas beneméritas, **prefiriendo a los descendientes de los descubridores, y a los nacidos en Indias y que sean casados** (13-14, 2, 3; y 49, 2 3) -como igualmente se dice que no se provean los cargos por precio o interés (37, 2, 2). De estos puestos en la administración real son excluidos, en su tierra, los encomenderos, vecinos y propietarios, sin duda no por discriminación social, sino atendiendo a los principios tradicionales que velan por la independencia e imparcialidad de la justicia. En este nivel de la administración, el cargo más vigilado es el de *Oficial Real*. No podían aspirar a este puesto los mercaderes, ni tratantes, ni los que ejercían oficios mecánicos, y para cubrir una vacante debían ser propuestas seis personas ricas del distrito (3 y 25, 2, 3). Por supuesto, ni ellos ni sus familiares podrían dedicarse al comercio, ni ser regidores en el cabildo (49, 52 y 54, 1, 8), pero además se les impone la prohibición de no poderse acompañar con ninguna persona, ni casar con ningún pariente hasta en cuarto grado de sus compañeros, castigándose incluso el que pudiera plantear esta posibilidad, aunque fuera sólo de palabra (56, 62 y 63, 1, 8).

Junto a los Oficiales Reales sitúa la Recopilación a los *gobernadores, corregidores y alcaldes mayores*, cargos que no se podrán dar a los que hubieren ejercido oficios mecánicos, y sí sólo a personas "honradas" y de las calidades requeridas por las leyes (3, 2, 3). Y se pide que los corregimientos de indios se den a personas "de buena conciencia" y que no sean deudos de ministros (54, 2, 3). A estos justicias les sirve de distinción el llevar siempre la vara y el habitar en las Casas Reales (11 y 48, 2, 5); les afectan las prohibiciones de comerciar, especialmente en granjerías con los indios (25 y 47, 2, 5), y las de casar en sus distritos y aun nombrar parientes o naturales del país en los cargos subalternos (44 y 45, 2, 5), pero particularmente están sujetos a la obligación de dar fianzas y presentar inventarios de sus bienes antes de tomar posesión (8 y 9, 2, 5).

Escribanos, procuradores y otros oficiales están exentos de acudir a los alardes, por entenderse que sus actividades son de gran importancia (21, 4, 3); en cambio, a los *alcaldes de minas* se les impone prohibición de comerciar, de rescatar plata, o de tener compañía con minero (1-3, 21, 4).

En otro escalón, referente a los *alguaciles mayores*, se recoge la prohibición de comerciar, pero de los simples *alguaciles* ya se previene -denotando su inferior extracción social- que sean

“conocidos”, y no de poca edad, ni tengan oficios mecánicos ni bajos (32 y 5, 20, 2).

Aún más bajo debe ser el puesto de *receptor ordinario de número*, cuando se legisla que lo ocupen personas “beneméritas” que no sean mulatos, ni mestizos (1.^a, 27, 2), lo que parece indicar que se encuentra este cargo en el límite inferior de los estratos sociales blancos.

La milicia es objeto de un tratamiento específico. Los *castellanos han de jurar su cargo ante un caballero hijodalgo, y no pueden tener comercio con los soldados, ni fiarles ropa. Los soldados* han de ser honrados por su jefe, bien entendido que no pueden sentar plaza los mestizos, mulatos, morenos, ni demás personas prohibidas (12, 10, 3). Al velar por el prestigio social de un ejército blanco se denota la vecindad estamental de la tropa con las castas. Hablando de nuevos descubrimientos, la Recopilación todavía recoge la vieja distinción militar entre *escuderos*, equivalentes a caballeros, y *peones*, a los que se adjudicarían tierras en distinta proporción (1.^a, 12, 4).

b: Vecinos

La categoría fundamental entre los blancos o españoles es la que otorga la condición de *vecino*. Es vecino aquel habitante que tiene casa poblada, aunque no sea encomendero, pero también explícitamente los hijos o hijas de los primeros pobladores y sus parientes aun más allá del cuarto grado, siempre que sean casados y con casa y familia separada (8, 5, 4). Pero se admite que un mestizo puede ser vecino (13, 12, 6).

De estos vecinos debe haber un libro formado por la audiencia, en el que consten sus méritos y las recompensas recibidas (164, 15, 2). Los vecinos “domiciliarios” tienen que defender la tierra, como los encomenderos (44, 8, 6) y por eso han de tener armas y caballos con los que concurrir a los alardes que se realicen cada cuatro meses (19, 4, 3), de los que nadie puede excusarse sin privilegio especial, como el concedido a los escribanos, procuradores y otros oficiales (21, 4, 3), o la hermandad de San Andrés de Lima, y a los bacinadores del hospital de San Lázaro de Cartagena (8 y 14, 4, 1), y por lo mismo no pueden salir de la provincia sin permiso del gobernador (17, 1, 5), ni se les puede ejecutar una deuda en sus armas y caballos, lo mismo que en Castilla (6 y 7, 14, 5). Los vecinos pueden contratar sin que medien los corredores de lonja (23, 10, 4), y pueden trabajar en las obras de fortificación (7, 6, 3), y ser capitanes de infantería en

Cartagena y otras ciudades (18, 12, 3), pero no sentar plaza con sueldo, como ningún natural u oficial de la ciudad (10, 10, 3). Los vecinos "honrados" pueden tomar asiento en bancos en la iglesia, como las mujeres "principales" pueden hacerlo junto a las esposas de las autoridades (25 y 33, 11, 3). Los vecinos tienen acceso a los cargos concejiles (6, 10, 4), que deben ser cubiertos no por elecciones, ni por sorteo, sino por almoneda, siempre que el **candidato tenga las partes y calidades precisas, atendándose más a su suficiencia que al precio que ofrezcan** (7, 20, 8).

Las partes y calidades precisas configuran al regidor como vecino distinguido que, pudiendo ser encomendero y descendiente de los primeros conquistadores, no puede ejercer como tratante en bastimentos, ni regatones, ni tener tabernas, ni traficar en mantenimientos por menor, ni usar oficios viles. En cambio, los regidores se situarán en los alardes junto al gobernador, y en caso de ser arrestados habrá de dárseles cárcel decente (9-13, 10, 4).

A los alcaldes ordinarios se les exige la calidad de "personas honradas", que sean hábiles y suficientes y que sepan leer y escribir (4, 3, 5).

Por sus actividades, la Recopilación distingue muy pocos grupos: comerciantes, mineros, pescadores de perlas, médicos y abogados, y gentes de oficios mecánicos, sin jamás determinar ninguna discriminación racial, y negándola expresamente en el caso de la minería.

La Recopilación alude a la existencia de *médicos*, protomédicos, cirujanos y boticarios, pero sólo para prohibir el ejercicio de la medicina a los que ya lo tienen vedado por las leyes castellanas (5, 6, 5), así como de los *abogados* sólo se determinan incompatibilidades: no pueden ejercer los parientes de oidores en su distrito (28, 24, 2); no pueden serlo quienes ocupan los cargos del Consulado de mercaderes (11, 46, 9), y se les encarga defiendan a los indios cobrándoles poco (25, 24, 2). Además han de jurar que no prestarán ayuda en causas injustas, y las desampararán (3, 24, 2).

Entre la gente del *comercio* se alude sin distinguir claramente, ni menos definir, a toda una gama de situaciones: mercaderes, comerciantes, tratantes, traperos, roperos, buhoneros, pulperos, mercaderes viandantes y forasteros, regatones, dueños de tienda y de tabernas de vino propio o ajeno, y vendedores de mantenimientos al por menor, más los corredores de lonja. De todos los comerciantes se dice que paguen la alcabala (4-5, 13, 8), y que

pueden ser gravados con tasas -pero no los mercaderes de España (6, 18, 4)- y que mercaderes y tratantes no pueden ser Oficiales Reales (25, 2, 3; y 54, 4, 8). A los corredores de lonja se les impide entrometerse en los contratos por menor, o sobre cosas de comer y beber (23, 10, 4).

De entre los mercaderes, alcanzan especial relieve los que pueden intervenir en las elecciones del Consulado, y más aún los que resultan elegibles para los cargos de esta institución. Los electores no pueden ser extranjeros, ni escribanos, ni criados de otras personas, ni solteros, ni letrados, ni tener tienda pública, **aunque sí** negociar con mercancías propias o consignadas por encomienda (5, 46, 9). Los elegibles para los puestos de prior y cónsules y diputados deben poseer casa propia en la ciudad y un capital superior a los treinta mil ducados en Lima, y a los veinte mil en México, y sólo podrán ser cargadores o encomenderos, y no habrán tenido tienda en los dos años anteriores, ni habrán tenido oficio ni tratos humildes y bajos, amén de las otras limitaciones que afectan a los electores. **También les afectan incompatibilidades de carácter familiar** -para que no se unan varios parientes en los cargos directivos- y la prohibición de ser reelegidos hasta pasados dos años (11, 46, 9). A las personas así seleccionadas ya se les puede otorgar el que sean reconocidas y tratadas como ministros del rey (47, 46, 9).

Se hila mucho menos fino entre los *mineros*, ya que cualquier persona, de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad, españoles e indios, pueden dedicarse a la obtención de metales (1, 19, 4), y en cambio el título 20 del libro IV enumera algunos privilegios en su beneficio, como el encargo a las autoridades de que los favorezcan, que no se les embarguen sus esclavos y utensilios, que se les faciliten maíces y materiales precisos para su actividad, e incluso que se les permita acceder al corregimiento y oficios concejiles de Potosí aunque tengan deudas de azoques.

Atención especial merecen los *pescadores de perlas*, cuyo tipo es el dueño de canoa, con doce negros, al que se concede derecho a voto para elegir entre sus iguales en la ranchería alcalde y cuatro diputados, debiendo celebrar cabildo cada dos meses (3-10, 25, 4). Los mayordomos y canoeros de las pesquerías perlíferas deben llevar siempre espada y arcabuz para defenderse de motines de negros y ataques de corsarios (27, 25, 4), y también se reconoce a estos pescadores el privilegio irrenunciable de que no se les ejecute

deuda en sus canoas, negros, ni aparejos, habiendo otra cosa en la que ejecutarla (2, 14, 5).

Son muy numerosos los *oficios mecánicos* aludidos en diversos pasajes de la Recopilación: sastres, jubeteros, calceteros, sederos, gorreros (20, 3, 3); llevadores o cargadores (12, 14, 4), carreteros (3, 17, 4); barqueros (2, 18, 8); plateros de oro y plata (6, 13, 8), silleros, freneros, pellejeros, guarnicioneros, herradores, zapateros (8 y 9, 13, 8). De todos ellos en general se dice que no están obligados a acudir a recibir a los virreyes (20, 3, 3), y del panadero o velero se dice que no puede ser al mismo tiempo pulpero (14, 18, 4). De los carreteros de México, que tienen que estar en Ulúa el 4 de octubre, coincidiendo con la flota (13, 17, 4). A las audiencias se les encarga que no reciban **informaciones sino de “personas de calidad”, y se pregunte a los declarantes si han tenido oficios bajos y mecánicos (8, 33, 2).**

El estrato profesional más simple parece ser el de *obrero*. De los que trabajan en las fortificaciones asalariados por la Corona se dice que pueden ser vecinos, pero también forzados, y se les fija una jornada de ocho horas, con descanso al mediodía, pero sólo de siete horas los sábados, para que en la octava se les pague el salario (3-12, 6, 3).

Siempre quedarían al final los blancos pobres y vagabundos, indeseables. A las viudas y personas pobres y miserables se les otorga prioridad en el despacho de sus pleitos y causas, “como es justo” (5, 14, 3). Los provinciales y alcaldes de la Hermandad se encargarán, en cambio, de refrenar los excesos de la mucha gente ociosa, vagabunda y perdida que habita en los despoblados (1.^a, 4, 5).

B) Los indios

La Recopilación confiere a “los pobres y miserables indios” (11, 14, 3), “tan necesitados de amparo y alivio” (14 y 26, 14, 3), un privilegio que claramente los sitúa -excluidos los caciques- en una posición subordinada a la de los españoles, aunque se les libra “de todo color de servidumbre” (8, 10, 1). De ellos se dice que son gente necesitada y que deben ser amparados, favorecidos y “sobrellevados” (1, 1, 6), y que los delitos contra ellos cometidos deben ser castigados con mayor rigor que los cometidos contra españoles (21, 10, 6), y las causas que se susciten sobre bienes de comunidad de los indios contra sus corregidores se lleven criminalmente, hasta la pena capital (35, 4, 6). En cambio, a los

indios amancebados no se les impondría la pena del marco que se aplicaba en Castilla (6, 8, 7).

Encomendados a la tutela de los “protectores de indios” (1.^a, 6, 6) y de los fiscales de las audiencias (34, 18, 2), se dispone su instrucción religiosa, y que suavemente se les enseñe la lengua española (8-17, 1, 1; y 5, 13, 1), así como el cultivo y tejido de lino y cáñamo (20, 18, 4). La protección que se les dispensa pretende que los indios sean “desagraviados”, que los abogados los defiendan cobrándoles poco, y que sus pleitos se vean dos días en semana, más los sábados, si no hay pleitos de pobres (176, 15, 2; 25, 24, 2: 81, 15, 2); que se guarden todas sus leyes y buenas costumbres antiguas, y que se apliquen sin embargo de apelación todas las que les sean favorables (4 y 5, 1, 2). No se les puede imponer penas pecuniarias, ni castigarlos en obrajes, ni tenerlos en cárceles, ni azotarlos, ni cortarles el cabello (6-8, 10, 1; y 6, 13, 1), aunque sí se les puede señalar pena de servicio personal temporal (10, 8, 7).

La defensa de su libertad es una de las razones para que no se autoricen obrajes, y para que se ordene que cesen de trabajar en los de paños de Nueva España (1 y 4, 26, 4). Tampoco pueden ser utilizados en pesquería de perlas (31, 25, 4), ni en el cultivo del añil en Guatemala (3, 14, 6), debiendo ser sustituidos por negros en las faenas de bogas del Magdalena (26, 8, 6). Pueden ser cargadores, pero no a las órdenes de cualquier mestizo (13, 7, 6).

No se les puede imponer repartimientos y derramas, como no sea para la construcción de algún puente del que les resulte beneficio (7, 15, 4), ni tampoco pagan alcabalas, salvo el dos por ciento de la coca (14, 13, 8), y no se les puede sacar de su tierra, ni se les permite venir a España, ni ser “mudados de sus naturalezas” (16, 1, 6), ni se les puede llevar en empresas de nuevos descubrimientos, salvo algunos intérpretes pagados, o bien indios labradores y oficiales voluntarios (15, 1, 4; y 3, 5, 4).

La tutela llega a la prohibición de que se les venda vino —aunque se autorizan pulquerías en México (36-37, 1, 6)— y a la suposición de que el vino del Perú perjudica a los indios de Guatemala, y al encargo de que los encomenderos hagan plantar sauces y otros árboles para que a los indios no les falte leña (18, 18, 4; y 16, 17, 4), así como a que a los grumetes “indios” de Filipinas se les suministren ropas de abrigo para la travesía del Pacífico (53, 45, 9) y se extiende a la necesidad de que las autoridades tengan que dar licencia para que los indios celebren sus bailes (38, 1, 6) y que se determine que,

entre indios, las injurias y riñas sin armas no se tengan por delito (11, 10, 5).

El indio queda, en conjunto, como vasallo libre, con la posible excepción de los caribes (1 y 13, 2, 6); configurado como labrador y oficial mecánico. Se le otorga libertad para enviar directamente grana y cochinilla a España (21, 19, 4), y se le reconoce capacidad para ser minero y tener minas sin intervención de ningún español, ni de sus caciques (14, 19, 4). Se da por admitido que los indios han de vivir en sus pueblos, dotados de autogobierno, aunque se autoriza que los oficiales mecánicos -indios oficiales, carpinteros, etc. -vivan en las ciudades "sin escándalos" (11, 5, 6). En Chile, los indios maestros en oficios no entrarían en la mita (45, 16, 6).

Los indios deben ser repartidos en encomienda (1.^a, 8, 6), incluso los capturados en guerras de Chile, que serían incorporados en **encomiendas del Perú (16, 2, 6). En sus pueblos y reducciones —de los que no pueden salir— los indios tendrían sus propias autoridades, alcaldes y regidores (16-19, 3, 6). Reaparece el espíritu protector** cuando se prohíbe que en los pueblos de indios vivan propietarios o vagabundos españoles, negros, mestizos, mulatos o zambaigos **no casados (21-22, 3, 6; y 1-3, 1, 7), o que los indios trabajen mezclados** con mulatos, mestizos y negros en las minas de Zaruma (19, 15, 6).

Pero la condición social del indio, difícilmente generalizable, queda sumida en la ambigüedad cuando, mientras se admiten los matrimonios mixtos con español (2, 1, 6), los indios quedan sujetos a tributo -aunque no las indias de cualquier edad que sean (19, 5, 6)-, y también los hijos de indio y negro, sea el negro libre o esclavo (2, 5, 7), y a mita -con algunas excepciones, como los maestros oficiales de Chile o los bacinadores indios del hospital de San Lázaro de Cartagena, y los indios oficiales de residencia urbana, sujetos a tributo pero no a mita (15, 4, 1; 11, 5, 6). Del mismo modo se prohíbe que los indios puedan estar a las órdenes de negros y mulatos, y se confiere a las autoridades indias poder sobre los negros y mulatos que causen agravios, y se veda que los indios puedan ser cargados por mestizos que no sean vecinos o hijos legítimos de vecinos (17, 3, 6; 13 y 16, 12, 6), todo lo cual parece ubicar a los indios junto a los españoles -y tal vez los mestizos- sobre los negros y mulatos y otras castas. Hay además la disposición de que se honre a los indios de Tlaxcala y que su alcalde reciba el título de "gobernador" (39, 1, 6).

Hay, sin embargo, un conjunto de disposiciones que expresan la inferioridad del indio. De un lado, la prohibición de que se les dé armas (24 y 31, 1, 6), más aún, de que se les enseñe a fabricar armas,

incluso de que vivan con quienes las fabrican (14, 5, 3). Además, el señalamiento de penas para los indios que lleven espada u otra arma, no siendo un principal con licencia, y la prohibición de que los indios anden a caballo (31 y 33, 1, 6). Del otro, y quizá todavía más elocuente, la prohibición de que las indias se sienten en los bancos de la iglesia (33, 15, 3).

C) Los mestizos

La ambigua situación social del mestizo es patente a través de las contadas disposiciones -poco más de una docena- en que la Recopilación alude a este grupo étnico. De un lado están las leyes que sitúan a los mestizos al mismo nivel de españoles e indios, como la que mantiene el patronazgo real sobre el colegio de **españoles, mestizos e indios en Michoacán, o sobre otro de niños pobres mestizos en México** (12 y 14, 23, 1). Incluso se les reconocen derechos que les confieren superioridad sobre los indios: un mestizo que sea "vecino" puede cargar indios (13, 12, 6), y los que vivan en lugares de españoles y mantengan casa y labranza pueden obtener licencia para portar armas (14, 5, 7). La equiparación con los blancos es total cuando se determina que el delito de adulterio se castigue en las mestizas igual que en las españolas (4, 8, 7).

Sin embargo, al mismo tiempo, se establecen discriminaciones que impiden a los mestizos acceder al puesto de receptor ordinario de número (1.^a, 27, 2), que incluso prohíben que se les acepte información para solicitar el cargo de escribano público (40, 8, 5), que les niega la posibilidad de sentar plaza como soldados (12, 10, 3). También está prohibido que se les envíe en los socorros a Filipinas (15, 4, 3) y que se les nombre protectores de indios (7, 6, 6).

Hay dos tachas -las de ilegitimidad y vagancia- que afectan al reconocimiento o no de determinados privilegios a los mestizos. Los mestizos pueden ser ordenados clérigos, siempre que tengan la suficiencia y calidades necesarias de vida y costumbres, y estén bien instruidos y sean hábiles y capaces... y procedan de legítimo matrimonio, y en otro caso no. También las mestizas pueden entrar en los conventos de religiosas (4 y 7, 7, 1). Para poder cargar indios se requiere que el mestizo sea vecino o hijo legítimo de vecino (13, 12, 6): así se alude, junto a la condición de "legitimidad" a la de "vecindad". Para la Recopilación, los mestizos que no sean vecinos son vagabundos, y estos aparecen mezclados con negros, mulatos, etc. y clasificados como elementos antisociales, a los que en particular les está vedado residir en pueblos de indios (2 y 4, 4, 7).

Por último, la Recopilación admite la posibilidad de que haya mestizos esclavos, situación en la que no pueden caer los indios. Se previene que los esclavos mestizos de las autoridades no traigan armas, salvo los de los alguaciles y otras justicias (16, 5, 7).

D) Los negros

En la Recopilación, los simplemente negros aparecen con frecuencia conjuntamente con otra serie de grupos étnicos que tienen alguna parte de sangre africana: mulatos, morenos, loros, zambaigos. Ningún privilegio especial se deriva del hecho de estas mezclas raciales y diversidad de colores, por lo que han de ser considerados como un solo grupo. La única distinción que en ocasiones se manifiesta es la de negro libre o esclavo. La gama de posibilidades que para los negros libres —y grupos afines— contempla la Recopilación abarca desde la de su matrimonio con español o con indio, hasta la de equiparación con los esclavos para el castigo de ciertos delitos, y hasta la de asociación formal en el texto con grupos legalmente perseguidos: “mulatos, negros, berberiscos e hijos de judíos” (título 5, libro VII). Es sin duda un interesante reflejo de la realidad el hecho de que la legislación prohíba específicamente a los mulatos —no a los negros—, como a los mestizos, el ser receptores de número, escribanos, o soldados. Los negros libres quedan claramente excluidos de los niveles sociales reservados a los blancos, y a los que en algunos casos tienen acceso los mestizos.

No se contempla la posibilidad del clérigo negro, o del vecino negro. Nadie puede autorizar a los negros a traer espadas o alabardas, ni ningún arma. Pero además, si usare arma en disputa con español —salvo defendiéndose—, aunque no hiera será castigado con cien azotes y clave en una mano, si reincidiere le será la mano cortada (15, 5, 7). Queda así netamente establecida la inferioridad del negro, aun libre, al que se aplica en este caso la misma pena que al esclavo. Con no menor claridad se determina que las penas previstas para quienes vendan vino cocido o tabaco en Panamá se dupliquen si el delincuente fuera negro, libre o esclavo, y además se le castigue con doscientos azotes (16, 18, 4). Es evidente que pesa más la condición de negro que la de libre.

De los negros libres debe haber un padrón especial; deben vivir con amo conocido y trabajar en la minería (3 y 4, 5, 7). Si llegan a

poseer hacienda, deben pagar al erario un marco de plata al año (1.^a, 5, 7). Hay morenos que trabajan como labradores y ayudan en la defensa de los puertos, e incluso existe una compañía de morenos en Tierra Firme, por lo que deben ser bien tratados, y no deben ser molestados por los rancheadores que en Cuba persiguen a los cimarrones (19, 5, 7). Pero al mismo tiempo se dispone que no anden de noche por las ciudades (12, 5, 7) y que en motines de negros no se haga proceso, sino que se haga castigo ejemplar y se les someta a esclavitud (26, 5, 7).

La estimación social reconocida a este grupo queda perfilada cuando se dispone que las negras —como las indias— no pueden sentarse en bancos en la iglesia (33, 15, 3), y que las negras, libres o esclavas, y las mulatas no se adornen con oro, perlas, ni seda, salvo si estuviesen casadas con español, y en este caso sólo podrían usar zarcillos, perlas, gargantillas, y ribete en la saya, y no manto, sino sólo mantellina (28, 5, 7).

Capítulo especial merecen las relaciones entre negros e indios. Ante todo, a los negros y mulatos, e incluso a los zambaigos no casados, les está prohibido vivir en pueblos de indios (2, 4, 7), y los negros de los encomenderos no deben tener comunicación con sus indios (15, 9, 6). Pero además, en ningún caso puede el negro tener a su servicio indios yanaconas o de otro tipo (16, 12, 6), y se le castigará especialmente si maltratare a un indio (19, 10, 6) así como si tuviere una india por manceba, lo que se sanciona con cien azotes la primera vez, y la segunda con destierro —al esclavo en este caso se le cortarían las orejas (7, 5, 7).

E) Los esclavos

Con la salvedad de que pueden ser esclavizados los indios caribes, (13, 2, 6), y una alusión a la existencia de mestizos esclavos, cuando la Recopilación trata de esclavos se refiere a negros (o mulatos); así con frecuencia, cuando menciona a los negros se refiere en concreto a los esclavos, aunque no siempre lo explicita.

La función del esclavo como mano de obra se hace claramente visible. Aparece como obrero en las fortificaciones (3, 6, 3), como buceador en las pesquerías de perlas (“negros de concha”. 13, 25, 4), como trabajador en los ingenios de metal y de azúcar (3 y 4, 14, 5), como remero en sustitución de los bogas del Magdalena (26, 13, 6), como trabajador en las estancias de Panamá (9, 5, 7), y como

sirviente en las ciudades, incluso armado en el acompañamiento de alguaciles y justicias (16, 5, 7). Está prohibido que un esclavo pueda ser el abanderado de una unidad militar, pero al parecer sí pueden ser esclavos los tambores y plfanos (7, 10, 3).

Por término general les está prohibido tener armas (16, 5, 7), y siempre debe vigilarse su comportamiento (13, 5, 7). Su castigo sería de azotes y hasta pérdida de una mano si atacase a un español, aunque no lo hiriera (15, 5, 7). Se supone que los esclavos promueven revueltas en las pesquerías de perlas, y por eso se ordena que los mayordomos y canoeros de estas rancherías tengan siempre espada y arcabuz (27, 25, 4). De los esclavos de Panamá se percibe que tienen alguna dedicación al comercio, estando prohibido contratar con ellos (9, 5, 7), especialmente en su negocio de vino cocido y de tabaco (16, 18, 4).

Está ordenado que los esclavos negros casen con negras, y no por eso sean libres, aunque lo quieran sus amos (5, 5, 7), y está especialmente prohibido que tengan mancebas indias, lo que se castiga con cien azotes, y con corte de las orejas a los reincidentes (7, 5, 7).

Los esclavos fugitivos son perseguidos por rancheadores (19, 5, 7). Los cimarrones han de ser capturados, reducidos y castigados, con tal que no se les corten las partes que honestamente no se pueden nombrar; y serán repartidos de modo que todos tengan amo (20-25, 5, 7).

Los esclavos, como los negros libres y los indios, han de ser instruidos en la religión cristiana (12, 1, 1).

CONCLUSIONES

El examen de la Recopilación permite asegurar que España participa en alto grado de las ideas mercantilistas imperantes en Europa, y que las refleja en su política económica indiana.

Queda en efecto patente el principio de la supremacía de los intereses y objetivos del *Estado* cuando buscando el poderío de éste se reserva una serie de monopolios o estancos —azogue, sal, pimienta, naipes, solimán, aunque excluye el de la cochinilla— y cuando prohíbe el corte de madera de caoba, cedro y roble, útiles para la construcción naval en La Habana. Cuando impulsa la construcción naval en el Mar del Sur, cuando prohíbe que los barcos

de Filipinas vayan a China, y cuando ofrece socorros pecuniarios a los fabricantes de naos. Pero sobre todo cuando establece toda una **serie de trabas a la libre actividad de los súbditos para obligar a que los metales preciosos vengan necesariamente a la península.**

En cambio, la política poblacionista no es rígidamente mercantilista. Es verdad que se procura mantener pobladas las provincias, pensando en su mejor defensa, y que se pretende combatir el ocio para que todos los habitantes contribuyan a la producción, e incluso se admite extranjeros que posean oficios útiles, pero los ideales de propagación de la ortodoxia católica imponen restricciones al paso hacia Indias, tanto de españoles que no sean católicos, como de esclavos musulmanes y de grupos —berberiscos, gitanos— de confesión o costumbres tenidas por inconvenientes.

El *metalismo* de la legislación indiana es bien conocido. La Recopilación proclama que “el descubrimiento, beneficio y labor de las minas es... conveniente a la prosperidad y aumento de estos reinos y los de las Indias”, y efectivamente se fomenta de varias maneras la minería, así como se procura impedir que los metales preciosos salgan de los dominios españoles, y a ello tiende sobre todo la prohibición o limitación del comercio con Filipinas (y aun se estimula el simple trueque de mercancías en Manila) como el cierre del puerto de Buenos Aires y el entorpecimiento del comercio del Río de la Plata con Charcas.

El *proteccionismo* aplicado por España, según la Recopilación, busca excluir del mercado nacional mercancías extranjeras —palo brasil, hierro de Lieja—, como busca eliminar la producción colonial competidora de la metropolitana: vinos, obrajes de paños; y al mismo tiempo intenta crear un flujo de materias primas americanas que pudieran alimentar la industria peninsular: así la lana de Nueva España y Nueva Granada, el tabaco cubano, los cueros, el genjibre; y fomenta otras producciones valiosas tales como la grana, la seda, el lino y el cáñamo.

Por último España aplica rigurosamente el principio de *exclusividad* del comercio con sus posesiones, principio netamente mercantilista, y sin el cual la empresa colonizadora, en términos económicos y de poder, no tendría sentido. La norma terminante de que en ningún puerto ni parte de las Indias se admite ningún género de tratos con extranjeros, pena de la vida, es sobradamente expresiva de esta actitud que, junto con el proteccionismo,

constituyen incuestionablemente en colonias, en sentido mercantilista, a los reinos indianos, como en sentido político produce la misma impresión la rotunda limitación de la única alusión a la posibilidad de celebrar juntas de ciudades en Perú o Nueva España, mientras se omite cualquier posibilidad de incorporar las Indias a las Cortes de Castilla, a cuya Corona están perpetuamente unidas.

Parece legítimo concluir, por tanto, que la política colonial española según la perfila la Recopilación es claramente mercantilista, mostrándose extremadamente ortodoxa en los planteamientos económicos, y en lo referente al poder del Estado, aunque descartando o superando tales planteamientos cuando así lo exigen compromisos de orden superior: la propagación y conservación de la fe católica impone, sin duda alguna, cargas y gastos improductivos e impide la que pudo ser copiosa afluencia de españoles y europeos de todo tipo a los reinos indianos. Esta es, sin duda, la principal y característica originalidad de la colonización española y del mercantilismo español.

En cuanto a la *estructura social*, se basa llanamente en el principio de la desigualdad entre los hombres y entre los grupos. La Recopilación reconoce la diferencia de las personas en estado, condición, preeminencia, dignidad o calidad. Siendo este dato del dominio común, el problema estriba en averiguar con la mayor exactitud posible las posiciones respectivas de los distintos grupos o personas dentro de la pirámide jerárquica.

Pronto se advierte, con todo, que hay dos criterios convergentes para determinar, en una primera aproximación, la ubicación de cada estamento o estrato social: el linaje y —en menor medida, aunque suponiéndola con frecuencia como inherente al linaje— la riqueza. Mucho más raramente aparece la estimación de niveles culturales, que sin embargo también van unidos tácitamente a los anteriores, y de manera característica son patrimonio del orden eclesiástico. Ha de admitirse que estos dos, o tres, criterios básicos de jerarquización social son los propios de la sociedad europea de la época. En Indias, sin embargo, la situación se complica sobre manera, porque el criterio primordial, que es sin duda el linaje, ha de aplicarse no a una, sino a tres razas y a todas sus mezclas, lo que crea abundantes posibilidades mal definidas. Por otra parte, existe, como en Europa, un cuarto criterio de origen cuando menos medieval que es el de la función. Según este criterio toda la sociedad

está dividida en los tres conocidos grupos, muy desiguales en número, de “los que rezan”, “los que batallan” y “los que trabajan”: el orden o estado eclesiástico, el estado nobiliario, y el “tercer estado”, o “estado llano”. Además, la función sigue diversificando subgrupos o estamentos, diferentes en dignidad, dentro de los órdenes o estados, y especialmente en el estado llano, que por su volumen y su amplia dispersión ocupacional permite la aparición de innumerables estratos.

Los cuatro criterios están interrelacionados y se determinan mutuamente en cualquier sentido. El linaje —o la raza— puede determinar la función, pero la mayor o menor dignidad de ésta puede afectar a las facilidades de ascensión social. La cultura, en sus formas medias o superiores, está reservada a determinados estamentos, pero su adquisición permite elevaciones notables. La riqueza parece correlativa a la condición nobiliaria, pero por eso mismo es uno de los caminos para el ennoblecimiento de los plebeyos.

Ciertamente la sociedad del siglo XVII —y especialmente la indiana— no ofrece la imagen de inmovilismo que se atribuye a la sociedad feudal o medieval, pero no está menos lejos de la movilidad y estimación casi exclusivamente económica características del mundo contemporáneo.

Los cuatro criterios de estimación social aludidos están presentes en la Recopilación.

La *función* se hace perceptible en el hecho de que se otorgue preeminencia al orden eclesiástico, al que se dedica el Libro I y se reconoce su fuero. También en la distinción del orden nobiliario y su fuero, y en la estimación en general de la profesión militar. Claramente se ve también la discriminación entre “oficios mecánicos y bajos” y otros que no lo son, y entre distintos tipos de actividad comercial, así como entre el comercio y otras actividades económicas. También este criterio influye en la descalificación de los ociosos y vagabundos.

En cuanto al *linaje*, es conocida la distinción entre peninsulares y criollos, especialmente por la preferencia otorgada a los descendientes de conquistadores, así como se advierte la preferencia de los españoles sobre indios y negros, constituidos los indios como tributarios, “miserables” y menores, y afectados los negros por la depreciación consiguiente a su condición de esclavos o descendientes de esclavos.

La importancia de la *riqueza* en la estimación social se manifiesta sobre todo en relación con el tercer estado. Se exigen determinados niveles de riqueza para ser Oficial Real o para acceder a los cargos del Consulado, o para tener derecho al voto entre los pescadores de perlas, aparte de que la riqueza permite la compra de oficios. Curiosamente hay casos en los que se establece un máximo de riqueza, por ejemplo a los bacinadores de Cartagena, o se limita el número de esclavos que pueden tener los oidores.

En cuanto a la *cultura*, tácitamente se supone a los nobles, a los funcionarios, a los eclesiásticos que regentan las Universidades, y a los grupos sociales de los que procede su alumnado. Expresamente se exige que los alcaldes de los ayuntamientos sepan leer y escribir. El factor cultural, en sentido amplio, excluye de la sociedad indiana a religiones distintas de la católica.

Ateniéndonos, en fin, exclusivamente a las informaciones suministradas por la Recopilación, en Indias encontramos:

1.º, un Orden eclesiástico, compuesto por clero secular y regular, con miembros masculinos y conventos femeninos, y nutrido predominantemente por personas de raza blanca, entre las que a veces se establece la diferenciación y alternancia en los cargos entre peninsulares y criollos. Con determinadas condiciones, se admite a los mestizos y mestizas. Dentro de este orden, obispos y clérigos tienen distintos privilegios. A la Iglesia se vincula además claramente la función cultural, así como la Inquisición, que tiene, como la Universidad, sus particulares privilegios.

2.º, un Orden nobiliario, del que forman parte los títulos nobiliarios, hidalgos y caballeros de Ordenes militares, que son aludidos en varias leyes. También los descendientes de los primeros pobladores, declarados hidalgos de solar conocido y nobles de linaje, que tienen derecho al uso de armas y a ser preferidos en las mercedes. Y también se incluyen aquí los encomenderos, que son a todos los efectos caballeros, con obligaciones militares que suponen incluso la imposibilidad de abandonar la provincia por cuya defensa deben velar. Todas estas personas son también presuntamente blancas. Pero en el orden nobiliario deben también contarse los caciques indios, a los que el rey, aunque no les permite llamarse señores, les reconoce jurisdicción hereditaria, aunque sin facultad para dictar pena de muerte o atroz, y con tal de que no sean mestizos. Además, a título personal, pueden ser nobles muchos de

los altos funcionarios de la administración, enaltecidos en todo caso por la delegación del poder real.

3.º, un Tercer Estado, en el que se agrupan gentes de tres razas e innumerables mezclas, y en el que existe un escalón último legalmente determinado que es el de los esclavos. La jerarquización básica es la de blancos, indios y negros, estando abierta la posibilidad de parcial equiparación del mestizo con el blanco.

Entre los *blancos*, la distinción global más importante es la de “funcionario” y “vecino”. Este constituye la célula de la comunidad local, en tanto que aquél es burócrata o militar; el vecino es, al parecer, propietario y labrador, aunque se ofrece una gama de otras ocupaciones propias de este Estado: profesionales, comerciantes, mineros y pescadores de perlas, gentes de oficios mecánicos, obreros, sirvientes. En ninguna de estas actividades se establece discriminación racial; en algunas —la minería— abiertamente se admite a todos, sea cual sea su raza y su condición social —aunque esta proclamación tiene limitaciones en otras leyes; en otras ocupaciones, se considera normal que libres y esclavos trabajen lado a lado —como en las obras de fortificación.

El privilegio general del funcionario tiene dos limitaciones: no tener ni adquirir familia en su distrito, y no ejercer comercio. Excepcionalmente establece que para los puestos de Oficiales Reales se propongan seis personas ricas del país, así como se impide a los oidores, alcaldes y fiscales tener propiedades en su distrito, y a los oidores tener más de cuatro esclavos. Por lo mismo no se admite al funcionario a mercaderes, ni oficiales mecánicos. Individualmente, los altos cargos se darían a miembros de familias nobles. Para los inferiores (gobernadores, corregidores) se solicitan personas honradas, de buena conciencia, con obligación de fianza e inventario de bienes. De los puestos menos destacados, como alguaciles, se espera que los ocupen personas conocidas y que no tengan oficios mecánicos y bajos. Del receptor ordinario de número se dice que sea benemérito, y no mulato ni mestizo.

Del soldado, de manera semejante, se dice que no sea mestizo, ni mulato, ni moreno. Aquí se establece una importante frontera racial.

En cuanto al vecino plebeyo —no encomendero o descendiente de primeros pobladores—, puede ser mestizo. Tiene acceso a los cargos concejiles, generalmente por compra, según se dispone, y para ser alcalde tiene que saber leer y escribir.

Acerca de las profesiones liberales —médicos y abogados—, ninguna indicación se encuentra acerca de su extracción social o racial.

De entre todas las gentes del comercio que alude la Recopilación se destaca la figura del elector del Consulado, que no puede tener tienda abierta, lo que lo señala como gran mercader o almacenero, miembro característico de la burguesía indiana. De los elegibles para los cargos consulares se dice además que deben tener casa propia en la ciudad y un capital de 20,000 ducados en México, o de 30,000 en Lima, lo que supone una considerable fortuna personal. Con estos requisitos, ya puede determinarse que tales personas sean tratadas como ministros del rey.

Los mineros y pescadores de perlas son gentes de todas razas y rangos, según lo admite la ley —aunque en realidad la minería está vedada a clérigos y funcionarios judiciales. Su privilegio es explícito acerca de la protección que les deben dispensar las autoridades, y de quedar preservados de embargos los utensilios de su profesión. El pescador de perlas con derecho a voto en su ranchería debe poseer canoa y doce esclavos.

En cuanto a los oficios mecánicos, que en gran cantidad enumera la Recopilación, quienes los ejercen no están obligados a acudir a los recibimientos de los virreyes, ni se les considera “personas de calidad”, y pueden ser indios a los que se autoriza a residir en las ciudades.

En teoría, todas estas ocupaciones son accesibles a los *mestizos*, especialmente la dignidad de “vecino” —siempre que sea legítimo, como se pide para la ordenación sacerdotal. Pero se discrimina a los mestizos para determinadas actividades que parecen constituir su techo de ascensión social: no deben ser soldados, ni admitidos en los socorros enviados a Filipinas, ni se les acepta como escribanos o receptores ordinarios de número, ni como protectores de indios. A partir de estos cargos, quedan por tanto excluidos de todos los puestos principales del gobierno o de la administración.

En cuanto a los *indios*, libres pero sujetos a tutela, la ley les reconoce capacidad para ser mineros y para dedicarse a la obtención y comercio de la grana, pero en general los contempla como agricultores, sin posibilidad de salir de sus pueblos y reducciones, no siendo con ocasión de la mita. Excepción constituyen los indios “oficiales mecánicos”, autorizados a vivir en las ciudades “sin escándalos”, con lo que se incorporan al

artesanado urbano. La consideración social del indio parece ser la equiparación con el español cuando se admiten los matrimonios mixtos entre ambos pueblos, pero su inferioridad viene expresada no solo por la sujeción en que está al tributo y la mita, sino por la prohibición de portar armas y montar a caballo, y la de que las indias no se sienten en los bancos de la iglesia.

La consideración social del *negro* es, sin duda, muy baja. Con frecuencia la Recopilación da normas al negro “sea libre o esclavo”, lo que da a entender que pesa más la condición de negro, que la de libre. También aparecen casos de fijación de penas que son dobles para el negro que para un infractor de otra raza que haya cometido igual delito, y resulta significativa la ley que dice que en motines de negros no se haga proceso, sino que se haga castigo ejemplar y se les someta a esclavitud. No menos esclarecedor es el hecho de que los negros y otros grupos o castas afines —mulatos, zambaigos— aparezcan asociados incluso en los títulos de la Recopilación con otros núcleos social y legalmente rechazados: berberiscos, hijos de judías, gitanos, así como los mestizos vagabundos. Por otra parte, no se plantea la posibilidad del vecino negro, o del clérigo negro. A todo negro le está prohibido portar cualquier tipo de arma, y las negras, libres o esclavas, y las mulatas tienen prohibido sentarse en los bancos de la iglesia, o adornarse con oro, perlas, ni seda, y aun siendo esposas de un español sólo podrían usar unos zarcillos y **gargantilla, y ribete en la saya, pero no manto, sino mantellina** —de nuevo la condición de negra o mulata pesa más que la de libre y aun de esposa legítima de un español. Se admite el negro libre labrador, que incluso llega a poseer hacienda, pero en general se concibe al negro libre como criado o sirviente de un amo español, y se previene que todos tengan amo y haya de ellos un padrón especial.

Por último, el *esclavo*, negro por lo común, sólo es conocido como trabajador de diversas clases —incluso, al parecer, como músico en unidades militares—, y buena parte de las leyes que les afectan se dirigen simplemente a hacer que sean constantemente vigilados, perseguidos y capturados si huyen, y castigados duramente en cualquier ocasión de delito. Ellos constituyen la indiscutible base de la pirámide social.